

**CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS**

MANUELA Y OTROS VS. EL SALVADOR

***AMICUS CURIAE EN NOMBRE DE
LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS***

9 de marzo de 2021

Introducción

1. Compuesta por 60 jueces y abogados eminentes de todas las regiones del mundo, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) promueve y protege los derechos humanos mediante el Estado de Derecho, utilizando su experiencia jurídica única para desarrollar y fortalecer los sistemas de justicia nacionales e internacionales. Establecida en 1952, y activa en los cinco continentes, la CIJ tiene por objeto garantizar el desarrollo progresivo y la aplicación efectiva de los derechos humanos internacionales y el derecho internacional humanitario; la realización de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales; la salvaguarda de la separación de poderes; la independencia de la judicatura y de la profesión jurídica.
2. La CIJ agradece a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la oportunidad de presentar el presente *amicus curiae*, y espera que sus argumentos sean útiles para la Corte en su resolución final sobre el presente caso.
3. En el presente escrito, las alegaciones de la CIJ se centran en:
 - a) el derecho al respeto a la vida privada en relación con la información sobre la propia salud, contemplado en el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina: el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina; y
 - b) La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la privacidad de la información sobre la propia salud.

El derecho al respeto de la vida privada en relación con la información sobre la propia salud en el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa

4. El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina: el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina ilustra la importancia que reviste la garantía de los derechos humanos en el contexto de la atención a la salud en el Consejo de Europa¹. El Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante en el ámbito de la bioética; su objetivo es proporcionar un marco jurídico internacional para proteger y garantizar el respeto de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante la codificación de una serie de

¹ Véase <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164>, ETS No.164, Oviedo, 04/04/1997, entrada en vigor 01/12/1999.

principios y prohibiciones con respecto a atención a la salud, la investigación médica, los trasplantes y la genómica².

5. En particular, el artículo 1 del Convenio sobre Biomedicina establece que el objeto y finalidad del instrumento es proteger la dignidad e identidad de todos los seres humanos y garantizarle a toda persona, sin discriminación, el respeto a su integridad y sus demás derechos y libertades fundamentales en la aplicación de la biología y la medicina. Para proteger esos intereses, el Convenio establece una serie de principios y prohibiciones en materia de bioética, investigación médica, consentimiento, derechos a la vida privada y a la información, trasplante de órganos, debate público, etc.
6. En particular, el Convenio garantiza varios derechos que son fundamentales en el contexto de la atención a la salud, incluido el derecho a la vida privada en relación con la información sobre la salud propia. El artículo 10 del Convenio sobre Biomedicina, titulado "Vida privada y derecho a la información", establece, entre otras cosas, que "toda persona tendrá derecho a que se respete su vida privada cuando se trate de informaciones relativas a su salud". Como se señala en el informe explicativo del Convenio, el primer párrafo del artículo 10 garantiza el derecho a la privacidad de la información en el contexto de la atención a la salud. De este modo, el artículo 10 confirma la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en virtud de la cual el Tribunal de Estrasburgo ha establecido que, de conformidad con el derecho al respeto a la vida privada y familiar, consagrado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, las personas tienen derecho al respeto y protección de la información sobre su salud³.

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la privacidad de la información sobre la salud

7. De conformidad con el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,

"la protección de los datos personales, en particular, de los datos médicos, es de importancia fundamental para que una persona disfrute de su derecho al respeto a la vida privada y familiar, garantizado por el artículo 8 de la Convención (art. 8). El respeto de la confidencialidad de los datos de la salud es un principio fundamental en los sistemas jurídicos de todas las Partes Contratantes del Convenio. Es fundamental no

² Véase Informe explicativo, Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina.

³ El artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos dice lo siguiente: "**Derecho al respeto de la vida privada y familiar**

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, su domicilio y su correspondencia.

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho salvo cuando esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de terceros".

sólo respetar el sentido de privacidad del paciente, sino también preservar su confianza en la profesión médica y en los servicios de salud en general. Sin esa protección, las personas que necesitan asistencia médica pueden verse disuadidas de revelar información de carácter personal e íntimo que sea necesaria para recibir el tratamiento adecuado e, incluso, de solicitar dicha asistencia, poniendo en peligro su propia salud y, en el caso de enfermedades transmisibles, la de la comunidad [...]. Por lo tanto, el derecho interno debe ofrecer las garantías adecuadas para impedir toda comunicación o divulgación de datos personales relacionados con la salud que puedan ser incompatibles con las garantías del artículo 8 del Convenio (art. 8) (véanse, *mutatis mutandis*, el apartado c) del párrafo 2 del artículo 3, los artículos 5, 6 y 9 del Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, Serie de Tratados Europeos n.º. 108, Estrasburgo, 1981)"⁴.

8. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó lo mismo en el caso **Z. vs. Finlandia**, que se refirió a la revelación del estado de VIH positivo de la demandante, en el contexto de un proceso penal contra su esposo. En ese caso, el Tribunal sostuvo que la revelación de la identidad de la demandante y de su estado de salud –es decir, su condición de paciente con VIH–, en el texto de la sentencia de un tribunal nacional puesto a disposición de los medios de comunicación, y en ausencia de cualquier razón convincente que justificara dicha revelación de información médica confidencial sobre ella, había supuesto una violación de su derecho al respeto a la vida privada y familiar, en virtud del artículo 8 del Convenio.
9. En su sentencia de 2006, en el caso **Panteleyenko vs. Ucrania**, que surgió de la denuncia del demandante sobre la divulgación en una audiencia judicial de información confidencial sobre su estado mental y su tratamiento psiquiátrico, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que obtener información confidencial de un hospital psiquiátrico sobre el estado mental del demandante y el tratamiento médico pertinente, así como divulgarla en una audiencia pública, había violado el derecho del demandante al respeto de su vida privada, garantizado por el artículo 8 del Convenio.
10. El caso **Armonas vs. Lituania y Biriuk vs. Lituania** surgió y se refirió a la publicación, en 2001, por parte del mayor diario de Lituania, de un artículo en su portada sobre "una amenaza de VIH en una zona remota de Lituania". En su sentencia sobre el caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reiteró que era fundamental que la legislación nacional salvaguardara la confidencialidad de los pacientes, y desalentara cualquier revelación de datos personales, especialmente teniendo en cuenta el efecto negativo de esas revelaciones en la voluntad de otras personas de someterse a pruebas voluntarias de detección del VIH y a buscar tratamiento adecuado. El Tribunal declaró que se había violado el artículo 8, y

⁴ Véase *Z v. Finlandia*, N.º 22009/93, 25 de febrero de 1997, párr. 95. Véase también la Guía sobre el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Derecho al respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y la correspondencia, actualizada el 31 de agosto de 2020, párr. 197, p 48.

expresó especial preocupación por el hecho de que, según el periódico, la información sobre la enfermedad de los demandantes había sido confirmada por el personal médico.

11. También en el caso de ***P. y S. vs. Polonia***, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reiteró su sentencia en el caso *Z. vs. Finlandia* sobre la importancia fundamental de la protección de los datos médicos para el disfrute de las personas de su "derecho al respeto a la vida privada y familiar, garantizado por el artículo 8 del Convenio"⁵, así como sobre el hecho de que "la confidencialidad de los datos de la salud es un principio vital en los sistemas jurídicos de todas las Partes Contratantes del Convenio. La divulgación de estos datos puede afectar drásticamente la vida privada y familiar de una persona, así como su situación social y laboral, al exponerla al oprobio y al riesgo de ostracismo [...] El respeto de la confidencialidad de los datos de salud es crucial no sólo para proteger la intimidad del paciente, sino también para mantener la confianza de esa persona en el profesión médica y en los servicios de salud en general. Sin esa protección, las personas que necesitan asistencia médica pueden verse disuadidas de buscar el tratamiento adecuado, poniendo así en peligro su propia salud"⁶.
12. El caso surgió y se refirió, entre otras cosas, a la divulgación al público de datos personales y médicos de una adolescente que había quedado embarazada como consecuencia de una violación y deseaba abortar. El Tribunal consideró, entre otras cosas, que "el hecho de que la cuestión de la disponibilidad del aborto legal en Polonia fuera objeto de un acalorado debate no le confiere al Estado un margen de apreciación tan amplio como para absolver al personal médico de sus obligaciones profesionales incontestables en relación con el secreto médico"⁷, y que la divulgación de información sobre el embarazo no deseado de la adolescente no podía "considerarse compatible ni con las normas del Convenio, en cuanto a la obligación del Estado de garantizar el respeto de la vida privada o familiar, ni con la obligación del personal médico de respetar los derechos de los pacientes establecidos por la legislación polaca". Por lo tanto, no perseguía un objetivo legítimo. Esto por sí solo es suficiente para justificar una violación del artículo 8 del Convenio"⁸.
13. Además, el Tribunal sostuvo que la adolescente "tenía derecho a que se respetara su intimidad con respecto a su vida sexual, independientemente de las preocupaciones o el interés que su situación generara en la comunidad local". La legislación nacional reconocía expresamente el derecho de los pacientes a la protección de sus datos médicos, e imponía a los profesionales de la salud la obligación de abstenerse de revelar información sobre las condiciones de sus pacientes [...] Sin embargo, a pesar de esta obligación, el hospital de Lublin puso a disposición de la prensa información relativa al presente caso"⁹.

⁵ *P. y S. v. Polonia*, 57375/08, 30/10/2012, párr. 128.

⁶ *Ibíd.*

⁷ *Ibíd.*, párr. 133.

⁸ *Ibíd.*

⁹ *Ibíd.*, párr. 134.

14. A la luz de las conclusiones antes mencionadas, el Tribunal pasó a sostener que la divulgación por parte de las autoridades de información personal y médica, en el caso, había constituido una violación del artículo 8 del Convenio.
15. Una vez más, en el caso **Y. Y. vs. Rusia**¹⁰, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reiteró que:
- a) la información personal sobre la salud de los pacientes pertenece a su vida privada;
 - b) la protección de la información médica tiene una importancia fundamental para que las personas puedan disfrutar de su derecho al respeto a la vida privada y familiar, garantizado por el artículo 8 del Convenio;
 - c) el respeto de la confidencialidad de la información de la salud es un principio vital en los sistemas jurídicos de todas las Partes Contratantes del Convenio, y es fundamental no sólo para respetar el sentido de privacidad de los pacientes de salud, sino también para preservar su confianza en la profesión médica y en los servicios de salud en general. Sin esta protección, las personas que necesitan asistencia médica pueden verse disuadidas de revelar la información de carácter personal e íntimo que pueda ser necesaria para recibir el tratamiento adecuado e, incluso, de solicitar dicha asistencia, poniendo en peligro su propia salud y, en el caso de las enfermedades transmisibles, la de la comunidad.
16. El caso surgió y se refería a la denuncia de la demandante de que el Comité de Asistencia Sanitaria de San Petersburgo había reunido y examinado su historial médico y el de sus hijos, y había remitido su informe, con los resultados de su examen, al Ministerio de Salud sin su consentimiento. A este respecto, el Tribunal consideró que la divulgación de datos médicos a organismos públicos, sin el consentimiento de la demandante, había constituido una violación del artículo 8 del Convenio.
17. En su sentencia de 2018 en el caso **Mockute' vs. Lituania**, que surgió y se refirió a la denuncia de la demandante de que un hospital público había revelado información altamente personal, sensible y confidencial sobre su vida privada a los periodistas y a su madre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó, entre otras cosas, que el derecho al respeto a la vida privada, garantizado por el artículo 8 del Convenio, proporciona una protección específica de los datos personales, incluida la protección de los registros personales de salud. En su sentencia sobre el caso, el Tribunal continuó declarando que:
- a) el hospital había compartido ilegalmente información privada, incluso sobre la vida sexual de la demandante, su diagnóstico de psicosis aguda, así como referencias a su tratamiento, sin su consentimiento;

¹⁰ Y. Y vs. Rusia, 40378/06, sentencia de 23 de febrero de 2016.

- b) estas revelaciones, así como las realizadas a la madre de la demandante, habían supuesto una injerencia en su derecho a la privacidad; y
- c) la divulgación había constituido un incumplimiento por parte del hospital, como agente del Estado, de las obligaciones legales internacionales y de las leyes nacionales en materia de salud y protección de datos.

18. A la luz de estas constataciones, el Tribunal concluyó, por tanto, que se había producido una violación del artículo 8.

CONCLUSIONES

19. Tanto el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en virtud del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, establecen que el derecho a la vida privada, a su vez, garantiza el derecho al respeto y a la protección de la información sobre la propia salud, como los datos personales y médicos, incluidos los relativos a un aborto, a la vida sexual de la persona y las referencias a su tratamiento médico. La divulgación de información sobre la salud de las personas compromete al artículo 8 del Convenio y constituye una injerencia en su derecho al respeto de la vida privada en virtud de esa disposición, a menos que las personas afectadas hayan renunciado inequívocamente a su derecho al respeto de la vida privada con respecto a esa información¹¹.

20. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en virtud del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ha establecido, además, que las Partes Contratantes del Convenio deben velar por que su legislación nacional ofrezca garantías eficaces y adecuadas contra los abusos, para evitar la divulgación de información de salud personal¹². Toda injerencia en el derecho al respeto a la vida privada, en virtud del artículo 8, debe ser "conforme a la ley", tener una base jurídica y ser previsible.

21. Las injerencias en el derecho al respeto y la protección de la información sobre la salud de una persona, como las causadas por la divulgación de información médica, incluida la relativa a un aborto, serán incompatibles con el artículo 8, a menos que estén justificadas por un requisito primordial de interés público¹³, o cuando redunden en interés de la persona afectada o en interés de la seguridad del personal médico¹⁴. Por lo tanto, proteger la confidencialidad de la información sobre la salud de una persona tendrá un peso considerable a la hora de determinar si la injerencia, es decir, la divulgación, fue

¹¹ *M. S. vs. SUECIA*, 20837/92, 27 de agosto de 1997, párrs. 32 a 33.

¹² *Z vs. Finlandia*, párr. 95; *Mockutel vs. Lituania*, párrs. 93 a 94.

¹³ *Z vs. Finlandia*, párr. 96.

¹⁴ *Y. vs. Turquía*, 648/10, 17 de febrero de 2015, párrs. 77 a 78.

proporcional al objetivo legítimo perseguido. Asimismo, la divulgación deberá ser "necesaria en una sociedad democrática", y proporcional al objetivo legítimo perseguido.

Livio Zilli

Livio Zilli
Asesor Jurídico Superior y Representante de las Naciones Unidas
Comisión Internacional de Juristas
Rue des Buis 3
P.O. Box 1270, 1211 Geneva 1,
Switzerland

INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS

MANUELA AND OTHERS V. EL SALVADOR

**WRITTEN SUBMISSIONS ON BEHALF OF
THE INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS**

March 9, 2021

International Commission of Jurists (ICJ) - Rue des Buis 3, P.O. Box 1270, 1211 Geneva 1,
Switzerland - info@icj.org

Introduction

22. Composed of 60 eminent judges and lawyers from all regions of the world, the International Commission of Jurists (ICJ) promotes and protects human rights through the Rule of Law, by using its unique legal expertise to develop and strengthen national and international justice systems. Established in 1952 and active on five continents, the ICJ aims to ensure the progressive development and effective implementation of international human rights and international humanitarian law; secure the realization of civil, cultural, economic, political and social rights; safeguard the separation of powers; and guarantee the independence of the judiciary and legal profession.
23. The ICJ is grateful to the Inter-American Court of Human Rights for the opportunity to submit the present third-party intervention and hopes that its submissions will be helpful to the Court in its ultimate determination of the present case.
24. In the present third-party intervention, the ICJ's submissions focus on:
- c) the right to respect for private life in relation to information about one's health in the Council of Europe's Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine; and
 - d) The case-law of the European Court of Human Rights on the right to privacy of information about one's health.

The right to respect for private life in relation to information about one's health in the Council of Europe's Convention on Human Rights and Biomedicine

25. The Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine illustrates the importance in the Council of Europe of ensuring human rights in the context of health care.¹⁵ The Convention on Human Rights and Biomedicine is the first legally-binding international instrument in the field of bioethics; it aims to provide an international legal framework to protect and ensure respect for human dignity, human rights and fundamental freedoms by codifying a number of principles and prohibitions with respect to health care, medical research, transplantation and genomics.¹⁶

¹⁵ See <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164>, ETS No.164, Oviedo, 04/04/1997, entry into force 01/12/1999.

¹⁶ See Explanatory Report, Convention on Human Rights and Biomedicine.

26. Article 1 of the Biomedicine Convention states that the instrument's object and purpose is safeguarding the dignity and identity of all human beings and guaranteeing to everyone, without discrimination, respect for their integrity and other rights and fundamental freedoms in the context of the application of biology and medicine. To protect those interests, the Convention establishes a series of principles and prohibitions with respect to bioethics; medical research; consent; the rights to private life and information; organ transplantation; public debate etc.
27. In particular, the Convention guarantees several rights that are critical in the health care context, including the right to respect for private life in relation to information about one's health. Article 10 of the Biomedicine Convention, which is entitled "Private life and right to information", states, among other things, that: "Everyone has the right to respect for private life in relation to information about his or her health." As the Explanatory Report to the Convention notes, the first paragraph of Article 10 guarantees the right to privacy of information in the health care context. In so doing, Article 10 confirms the case-law of the European Court of Human Rights through which the Strasbourg Court has established that, pursuant to the right to respect for private and family life enshrined in Article 8 of the European Convention on Human Rights, people are entitled to respect for and protection of information about their health.¹⁷

The case-law of the European Court of Human Rights on the right to privacy of information about one's health

28. Pursuant to Article 8 of the European Convention on Human Rights,
- "the protection of personal data, not least medical data, is of fundamental importance to a person's enjoyment of his or her right to respect for private and family life as guaranteed by Article 8 of the Convention (art. 8). Respecting the confidentiality of health data is a vital principle in the legal systems of all the Contracting Parties to the Convention. It is crucial not only to respect the sense of privacy of a patient but also to preserve his or her confidence in the medical profession and in the health services in general. Without such protection, those in need of medical assistance may be deterred from revealing such information of a personal and intimate nature as may be necessary in order to receive appropriate treatment and, even, from seeking such assistance, thereby endangering their own health and, in the case of transmissible diseases, that of the community [...]. The domestic law must therefore afford appropriate safeguards

¹⁷ Article 8 of the European Convention on Human Rights reads as follows "**Right to respect for private and family life**

1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.
2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others."

to prevent any such communication or disclosure of personal health data as may be inconsistent with the guarantees in Article 8 of the Convention (art. 8) (see, *mutatis mutandis*, Articles 3 para. 2 (c), 5, 6 and 9 of the Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data, European Treaty Series no. 108, Strasbourg, 1981).¹⁸

29. The European Court of Human Rights found as much in the case of **Z. v. Finland**, which arose from and concerned the disclosure of the applicant's HIV-positive status in the context of criminal proceedings against her husband. In that case, the Court held that the disclosure of the applicant's identity and of her medical condition, that is, her HIV-positive status, in the text of a domestic court's judgment made available to the media in the absence of any cogent reasons militating for such a disclosure of confidential medical information about her, had amounted to a violation of her right to respect for her private and family life under Article 8 of the Convention.
30. In its 2006 judgment in the case of **Panteleyenko v. Ukraine**, which arose from and concerned the applicant's complaint about the disclosure at a court hearing of confidential information about his mental state and psychiatric treatment, the European Court of Human Rights found that obtaining from a psychiatric hospital confidential information about the applicant's mental state and relevant medical treatment and disclosing it at a public hearing had violated the applicant's right to respect for his private life guaranteed by Article 8 of the Convention.
31. The case of **Armonas v. Lithuania and Biriuk v. Lithuania** arose from and concerned the 2001 publication by Lithuania's biggest daily newspaper of an article on its front page concerning 'an AIDS threat in a remote part of Lithuania'. In its judgment in the case, the European Court of Human Rights reiterated that it was crucial that domestic law safeguarded patient confidentiality and discouraged any disclosures of personal data, especially bearing in mind the negative impact of such disclosures on the willingness of others to take voluntary tests for HIV and seek appropriate treatment. The Court went on to find a violation of Article of 8 and expressed particular concern at the fact that, according to the newspaper, the information about the applicants' illness had been confirmed by medical staff.
32. In the case of **P. and S. v. Poland** too, the European Court of Human Rights reiterated its holdings in *Z. v. Finland* on the fundamental importance of the protection of medical data to people's enjoyment of their "right to respect for their private and family life as

¹⁸ See, *Z v. Finland*, no. 22009/93, 25 February 1997, para. 95. See, also, Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights, Right to respect for private and family life, home and correspondence, Updated on 31 August 2020, para. 197, p. 48.

guaranteed by Article 8 of the Convention”,¹⁹ as well as on the fact that respect for “the confidentiality of health data is a vital principle in the legal systems of all the Contracting Parties to the Convention. The disclosure of such data may dramatically affect an individual’s private and family life, as well as his or her social and employment situation, by exposing that person to opprobrium and the risk of ostracism [...] Respecting the confidentiality of health data is crucial not only for the protection of a patient’s privacy but also for the maintenance of that person’s confidence in the medical profession and in the health services in general. Without such protection, those in need of medical assistance may be deterred from seeking appropriate treatment, thereby endangering their own health”.²⁰

33. The case arose from and concerned, among other things, the disclosure to the public of personal and medical data about a teenage girl, who had become pregnant as a result of rape and who wished to have an abortion. The Court found, among other things, that “the fact that the issue of the availability of legal abortion in Poland is a subject of heated debate does not confer on the State a margin of appreciation so wide as to absolve the medical staff from their uncontested professional obligations regarding medical secrecy”,²¹ and that the disclosure of information about the teenager’s unwanted pregnancy could not “be regarded as compatible either with the Convention standards as to the State’s obligation to secure respect for one’s private or family life, or with the obligations of the medical staff to respect patients’ rights laid down by Polish law. It did not therefore pursue a legitimate aim. That of itself is sufficient to ground a breach of Article 8 of the Convention.”²²

34. Furthermore, the Court held that the teenage girl “was entitled to respect for her privacy regarding her sexual life, whatever concerns or interest her predicament generated in the local community. The national law expressly recognised the rights of patients to have their medical data protected, and imposed on health professionals an obligation to abstain from disclosing information about their patients’ conditions [...] Yet, despite this obligation, the Lublin hospital made information concerning the present case available to the press.”²³

35. In light of the above-mentioned findings, the Court went on to hold that the authorities’ disclosure of personal and medical information in the case had constituted a violation of Article 8 of the Convention.

36. Once again, in the case of **Y.Y. v. Russia**,²⁴ the European Court of Human Rights reiterated that:

d) personal information about health patients pertains to their private life;

¹⁹ *P. and S. v. Poland*, 57375/08, 30/10/2012, para. 128.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, para. 133.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, para. 134.

²⁴ *Y.Y. v. Russia*, 40378/06, judgment of 23 February 2016.

- e) the protection of medical information is of fundamental importance to people's enjoyment of their right to respect for private and family life as guaranteed by Article 8 of the Convention;
- f) respecting the confidentiality of health information is a vital principle in the legal systems of all the Contracting Parties to the Convention, and it is crucial not only to respect health patients' sense of privacy but also to preserve their confidence in the medical profession and in the health services in general. Without such protection, those in need of medical assistance may be deterred from revealing such information of a personal and intimate nature as may be necessary in order to receive appropriate treatment and, even, from seeking such assistance, thereby endangering their own health and, in the case of transmissible diseases, that of the community.

37. The case arose from and concerned the applicant's complaint that the St Petersburg Committee for Healthcare had collected and examined her medical records and those of her children and forwarded its report containing the results of its examination to the Ministry of Healthcare without her consent. With respect to this, the Court found that the disclosure of medical data to public bodies without the applicant's consent had constituted a violation of Article 8 of the Convention.

38. In its 2018 judgment in the case of ***Mockute v. Lithuania***, which arose from and concerned the applicant's complaint that a publicly run hospital had revealed highly personal and sensitive, confidential information about her private life to journalists and to her mother, the European Court of Human Rights confirmed, among other things, that the right to respect for private life as guaranteed by Article 8 of the Convention provides specific protection for personal data, including protection of personal health records. In its judgment in the case, the Court went on to find that:

- d) the hospital had unlawfully shared private information -- including about the applicant's sexual life, her diagnosis of acute psychosis and references to her treatment -- without her consent;
- e) those disclosures, as well as those made to the applicant's mother, had amounted to an interference with her right to privacy; and
- f) the disclosures had constituted a failure on the part of the hospital as a State agent to abide by international legal obligations and domestic health and data protection laws.

39. In light of the above-mentioned findings, the Court concluded that there had therefore been a violation of Article 8.

CONCLUSIONS

40. Both the Convention on Human Rights and Biomedicine and the case-law of the European Court of Human Rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights establish that the right to private life, in turn, guarantees the right to respect for and protection of information about one's health, such as personal and medical data, including relating to an abortion, to one's sexual life and references to one's health treatment. Disclosure of information about people's health will engage Article 8 and constitute an interference with their right to respect to private life under that provision unless the individuals concerned have unequivocally waived their right to respect for private life with regard to that information.²⁵
41. The case-law of the European Court of Human Rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights has further established that Contracting Parties to the Convention must ensure that their domestic law provides effective and adequate safeguards against abuse, and to prevent disclosure of personal health information.²⁶ Any interference with the right to respect for private life under Article 8 must be "in accordance with the law", have a legal basis and be foreseeable.
42. Interferences with the right to respect for and protection of information about one's health, such as those caused by disclosures of medical information, including relating to an abortion, will be incompatible with Article 8 unless they are justified by an overriding requirement in the public interest,²⁷ or when they are in the interest of the person concerned or in the interest of the safety of medical staff.²⁸ Protecting the confidentiality of information about one's health will therefore weigh heavily in determining whether the interference, i.e. the disclosure, was proportionate to the legitimate aim pursued. In addition, the disclosure will have to be "necessary in a democratic society" and proportionate to the legitimate aim pursued.

Livio Zilli

Livio Zilli
Senior Legal Adviser & UN Representative
International Commission of Jurists
Rue des Buis 3
P.O. Box 1270, 1211 Geneva 1,
Switzerland

²⁵ *M.S. v. SWEDEN*, 20837/92, 27 August 1997, paras 32-33.

²⁶ *Z v. Finland*, para. 95; *Mockute v. Lithuania*, paras 93-94.

²⁷ *Z v. Finland*, para. 96.

²⁸ *Y. v. Turkey*, 648/10, 17 February 2015, paras 77-78.